



## TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

### SALA LABORAL

Medellín, marzo 28 de 2023

Radicado: 05001 31 05-002-2016-00366-01  
Demandante: CARLOS ANDRES CORREA  
Demandado: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A  
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE  
ANTIOQUIA  
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA  
Tema: INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE  
PARCIAL

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

### ANTECEDENTES

El proceso cursó con el fin de determinar si era viable decretar la nulidad del dictamen practicado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y determinar si AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A., debía responder por la indemnización por incapacidad permanente parcial por el accidente de trabajo sufrido por el demandante el 21 de febrero de 2012, dando aplicación a lo establecido en el art. 7º del Decreto 1295 de 1994, literal b) y el art. 4 de la misma norma, y finalmente si era viable o no conceder perjuicios morales en favor del demandante.

El *A quo* teniendo probada la pérdida de capacidad laboral del demandante y el origen de la misma, ordenó el reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial la cual calculó de forma indexada hasta la fecha de la sentencia.

Inconforme con la decisión fue **recurrida por la parte demandada AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A** quien para sustentar el recurso indicó que en el presente proceso, al demandante no se le ha practicado nuevo dictamen que permita establecer a cuánto asciende su pérdida de capacidad laboral o si por el contrario ha mejorado respecto al dictamen aportado, por lo tanto, solicita se estudien nuevamente los presupuestos para que al demandante le sea reconocida la indemnización a la que fue condenada la demandada.

### **ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 13 la Ley 2213 de 2022, manifiesta el apoderado de la demandada AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A que la indemnización ordenada no había sido pagada teniendo en cuenta que el demandante pretendía a través de otro experticio obtener un mayor valor, pero que habiendo obrado de buena fe, consideran improcedente la indexación de la condena en la medida que siempre estuvieron dispuestos a pagar la indemnización conforme al dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia que fue controvertido en el presente proceso; por su parte, el apoderado del demandante solicita se confirme la decisión arguyendo que la indexación es una medida adoptada por el juez para actualizar los valores monetarios.

### **CONSIDERACIONES**

Sea lo primero indicar que en este caso se encuentran por fuera de discusión que **1)** el señor CARLOS ANDRES CORREA sufrió un accidente laboral el 29 de febrero de 2012, **2)** que el 4 de diciembre de 2012 la ARL COLPATRIA emitió el dictamen de

calificación de PCL N° 18478 donde determinó un 9.33% de PCL de origen laboral por accidente de trabajo (pág. 74-78 del archivo, **3**) que el 16 de enero de 2013 la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA mediante dictamen N° 43428 calificó al demandante con una PCL del 16.73% estructurada el 17 de julio de 2012 como consecuencia del accidente de trabajo (pág. 79-84 del archivo 3).

De acuerdo con el planteamiento que enmarca la Litis, y como quiera que el presente proceso se conoce conforme a la alzada que presentó la demandada AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A, los supuestos de derecho que se estudiarán serán:

La ley 776 de 2002, establece en su artículo 5° que aquellos afiliados que no tienen una PCL suficiente para causar una prestación pensional por invalidez, pero tienen una PCL superior al 5% pero inferior al 50%, se les considerará como incapacitado permanente parcial, y tendrán derecho a una indemnización en proporción al daño sufrido que va desde 2 a 24 Salarios Base de Liquidación. Facultando a las ARL para que en aquellos casos en los que se tiene patologías progresivas, realice calificaciones posteriores y reajuste la indemnización previamente cancelada, recurriendo en todo caso para el cálculo de la indemnización a las tablas del Decreto 2644 de 1994.

Ahora, en lo que respecta a las entidades llamadas a realizar las calificaciones de PCL el artículo 9° de la misma ley indica que la obligación está a cargo de la ARL, y de existir discrepancias se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez, lo anterior, concordado con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012.

Por su parte el Decreto 1352 de 2013 estableció en el artículo 44 que “Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la Justicia Laboral Ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la

Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, el Director Administrativo y Financiero representará a la junta como entidad privada del Régimen de Seguridad Social Integral, con personería jurídica, y autonomía técnica y científica en los dictámenes”.

Al respecto la H. Corte Suprema de Justicia ha indicado SL 5353 de 2019 “*que los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez regionales o nacional, no son pruebas solemnes, de modo que pueden controvertirse ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por (...)*

*Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los jueces del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías”.*

Relacionado lo anterior, cierto es, que los dictámenes de las entidades a las que les corresponde emitir su pronunciamiento en primera instancia sobre la pérdida de capacidad laboral del trabajador no son inmutables e incontrovertibles, menos cierto es que los aportados por las partes son vinculantes para la decisión a emitir, ya que todo depende de la interpretación que se le dé a cada prueba y en conjunto con todo lo aportado al proceso, teniendo en cuenta para ello los principios de la libre formación del convencimiento y de la sana crítica del juez.

Adicionalmente, también ha manifestado la H. Corte que, si bien el juez laboral puede modificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y fecha de estructuración evaluado por juntas y fondos, no lo puede hacer prescindiendo de expertos, pues la

potestad del juez no llega al punto de dictaminar de forma definitiva sin el apoyo de los conocedores en la materia.

Ahora, en el presente caso la parte actora solicitó con la demanda se declararan nulos los dictámenes emitidos por la ARL COLPATRIA, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y el emitido por la FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, esta última solicitud valida de un anti tecnicismo en la medida que dicha entidad no hace parte del sistema de seguridad social y por lo tanto, no era procedente demandar la nulidad del dictamen que ésta proferiera, de ahí que la determinación que adoptara el juzgador de instancia correspondió a decretar su contradicción y como consecuencia de ello, negó la práctica de un nuevo experticio a cargo de la misma entidad calificadora; pese a lo anterior, teniendo en cuenta que le correspondía a la parte actora hacer comparecer al perito a efectos de que se realizara la contradicción del dictamen y no cumplió con dicha carga procesal, el A quo procedió a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 228 del CGP cuya consecuencia correspondió a quitarle su valor probatorio, es decir, el mismo no sería tenido en cuenta, así las cosas sin que existiera dictamen para controvertir aquellos sobre los cuales se solicitaba la nulidad, conllevo a que, en primera medida la pretensión declarativa esbozada con la demanda inicial no estaría llamada a prosperar pues no se aportaron medios de convicción que dieran lugar al operador jurídico para encontrar los dictámenes realizados nulos y en su lugar otorgar una calificación distinta.

Conforme lo anterior, debe dársele plena validez al dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia donde determinó una PCL del 16.73% de origen laboral.

Con ello para esta Sala es claro que si bien los dictámenes que fueron objeto de reparo de la parte accionante no son susceptibles de nulidad, en tanto no se logró controvertir la veracidad de los mismos, lo cierto es que el señor CARLOS ANDRES CORREA presenta una disminución en su pérdida de capacidad laboral por la

ocurrencia de un accidente laboral, que debe ser indemnizada conforme lo dispone la Ley 776 de 2002.

Se tiene acreditado pues que AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A., con ocasión al dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia que estableció una PCL 16.73% con fecha de estructuración del 17 de julio de 2012, es la encargada de realizar el reconocimiento y pago de la indemnización acá pretendida, pues no se probó que la misma ya hubiera sido pagada en favor del actor.

Ahora, de conformidad con la tabla de equivalencias que trae del Decreto 2644 de 1994, el señor CARLOS ANDRES CORREA tiene derecho a una indemnización por incapacidad permanente parcial equivalente a 7.5 salarios base de liquidación, aumentada en otro tanto, conforme a la PCL establecida en un 16.73%, es decir, en el equivalente a 7.84 salarios base de liquidación, que de conformidad con el salario aceptado por la demandada al momento de dar respuesta al hecho noveno de la demanda, para la fecha de estructuración ascendía a la suma de \$641.498, arrojando un total de **\$5.030.748** por concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial suma ligeramente inferior a la reconocida en primera instancia, suma que deberá indexar al momento del pago.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la devaluación de la moneda es un hecho notorio y de público conocimiento y como quiera que la liquidación de la indemnización que se reconoce en la presente decisión se hizo conforme el salario del año 2012, fecha en la que se situó la estructuración de la PCL, se ordenará a AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A que al momento de realizar el pago de la indemnización permanente parcial deberá indexar la suma a pagar.

Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia MODIFICANDO únicamente la cuantía de la indemnización.

Resta por indicar que se mantendrá la condena en costas en primera instancia, en tanto la misma se justificó desde las premisas del artículo 365 del CGP. En esta instancia a cargo de la demandada AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A y en favor del demandante las que se tasan en la suma de \$200.000.

En los términos expuestos quedan resueltos los aspectos de la apelación.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, MODIFICA** la providencia impugnada en el sentido de indicar en el numeral segundo que la indemnización por incapacidad permanente parcial en favor del señor CARLOS ANDRES CORREA quien tiene una PCL del 16.73% de origen laboral, corresponde a la suma de \$5.030.748 equivalente a 7.84 Salarios Base de liquidación, suma que deberá ser indexada al momento de realizar el pago. Se CONFIRMA en lo demás.

Costas como indico el A quo, en esta instancia, a cargo de la recurrente y en favor del demandante en la suma de \$200.000.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

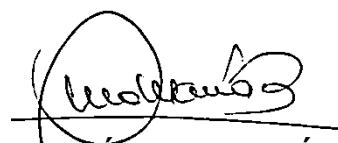
Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001-31-05-002-2016-00366-01  
Demandante: **CARLOS ANDRES CORREA**  
Demandados: **AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A**  
**JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**  
**DE ANTIOQUIA**  
Decisión: **CONFIRMA Y MODIFICA**  
Magistrado ponente **DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 10 de abril de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

**RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS**  
**SECRETARIO**